

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 10° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-14441-2019
CARATULADO : LILLO/C. D. E.

Santiago, seis de Julio de dos mil veintitrés

VISTOS:

En folio 1, comparece Pablo Andrés Solovera Catalán, abogado, domiciliado en Nueva Amunátegui N°1405, oficina 404, comuna de Santiago, en representación judicial de **FLORINDA DEL CARMEN AGUILERA JARAMILLO**, técnico laboralista dental; **MANUEL AGUILERA JARAMILLO**, desempleado; y **CARLOS LILLO ACUÑA**, soldador, quienes vienen en interponer demanda en juicio de hacienda por indemnización de daños y perjuicios en contra del **ESTADO DE CHILE**, persona jurídica del giro de derecho público, representada legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, quien a su vez es representado por María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, oficina 1102, comuna de Santiago, solicitando la demanda de autos sea acogida en todas sus partes condenándose al Estado de Chile a pagar a cada uno de los demandantes una indemnización compensatoria del daño moral sufrido por la suma de \$50.000.000.-, todo ello con expresa condena en costas.

Inicia su exposición haciendo un preámbulo en el cual describe en primer lugar que en Chile el Estado a través de las fuerzas armadas en su conjunto aplicaron una política de violencia sistemática de terror en contra de su propio pueblo, destinada a la desaparición forzosa de personas, tortura o asesinato, por el solo hecho de ser partidarios de una determinada postura política, todo lo que se produjo en el contexto de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Continúa relatando que el 26 de septiembre de 2003 el presidente de Chile en ese entonces, Ricardo Lagos, dispuso la creación de la denominada comisión Valech, con el objeto de esclarecer la identidad de las personas que fueron privadas de libertad o sufrieron algún tipo de tortura por razones políticas, por actos perpetrados por agentes del Estado dentro del período que abarca desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990, esto en razón de que la antigua Comisión Rettig, solo se pronunció sobre ejecutados políticos por agentes del Estado de Chile, durante la época de la Dictadura Cívico-Militar.

Indica que en el contexto antes descrito sus representados han comparecido con el objeto de obtener una legítima reparación por el daño



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

psicológico permanente que experimentaron al ser víctima de las vejaciones de las que sufrieron como consecuencia del actuar ilegítimo del Estado de Chile.

Posteriormente procede a realizar una síntesis respecto a los agravios sufridos por cada uno de los demandantes, principiando por Florinda del Carmen Aguilera Jaramillo. Narra que la señora Aguilera Jaramillo al momento de ocurrir el golpe de estado vivía en la comuna del Bosque. Después del golpe de estado su padre se traslada a Argentina debido a que vecinos del sector denunciaron la actividad política de este. Indica que recuerda a su padre como una persona que hablaba constantemente de política y reconoce que él le transmitió a ella y sus cuatro hermanos importantes valores como el compañerismo y la preocupación por los demás. Luego continúa relatando que con dieciséis años ingresó a las fuerzas rebeldes del MIR, así como al Partido Comunista, intentando desde esa plataforma recuperar la democracia perdida, esto a través de diversas manifestaciones de carácter pacífico. Señala que a causa de su militancia su antiguo carácter tímido se transformó en una personalidad valiente que no temía exigir justicia, sin importar las consecuencias que esto podía tener. Añade que recuerda que su hermana Juana quien también militaba en el MIR, cayó detenida y fue violentamente torturada, lo que le genera un dolor insufrible; y luego de liberada emigra y se radica en Francia, periodo durante el cual perdió todo contacto con ella.

Continúa indicando que unos años después pasa a la clandestinidad con el objeto de mejorar el bienestar de las personas menos favorecidas, y siempre preocupada también por ayudar a su familia. Indica que su primera detención ocurrió en San Miguel, por arrojar folletos en la vía pública y que carabineros que intervinieron en la misma actuaron de forma absolutamente desproporcionada, desnudándola de torso y pies, dándole golpes en la cara junto a otra compañera que estaba con ella en ese momento. Detalla que al momento de sacarse el sostén, un Carabinero le dice “¿quién te enseñó a sacarte el sostén así?” a la vez que pasa su lengua por el rostro de Florinda. Recuerda que hasta el día de hoy le deja una sensación de asco. Indica que la situación no pasó a mayores debido a que lamentablemente comenzaron a golpear a la “Paty”, una compañera suya. Siente entonces una sensación paradójica pues deja de recibir apremios justamente debido al maltrato de sus compañeras.

Procede a referirse a la segunda detención experimentada por la señora Aguilera Jaramillo, indicando que esta se dio en un establecimiento ubicado en el sector de La Pincoya, siendo trasladada posteriormente a un recinto ubicado en Vicuña Mackenna, esto en la década de los 80, cuando tenía aproximadamente 40



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

años. Explica que en este lugar lo pasó mal, pues presencié cómo le volaron los dientes a un compañero, mientras sufrían encerrados entre patadas, escupos y agarrones. Luego sería nuevamente trasladada junto con otras mujeres al Centro de Orientación Femenina, lugar en el cual recibió golpizas por parte de gendarme. Señala que esta última experiencia fue especialmente fuerte para su representada pues además del dolor sufrido por los apremios ilegítimos, le afectó especialmente el hecho de que estos fueron perpetrados por otras mujeres. Añade que estuvo en aquel lugar durante 5 días aproximadamente, periodo en el cual debido a la falta de condiciones higiénicas mínimas y la desconfianza que tenía hacía sus torturadoras, no comió hasta que fue liberada.

Indica que su representada detalló que el documento que se le entregó al ser liberada decía relación con causas vinculadas a la prostitución, lo que le generó un problema emocional con su madre, con quien mantuvo discusiones por largo tiempo a causa de las imputaciones que le efectuó el Centro de Orientación Femenina.

Señala que la señora Aguilera Jaramillo, también le expresó que en la década de los 90, se encontraba en una plaza junto a un compañero, quien le contó que había reconocido a su hermana Juana, lo que propició su reencuentro.

Luego procede a referirse a los agravios experimentados por el demandante Carlos Lillo Acuña, partiendo por señalar que aquel fue diagnosticado con Trastorno de Estrés Postraumático, Hipoacusia, desdentado parcial, todo ello como consecuencia de los eventos de tortura que sufrió. Agrega que a raíz de los daños sufridos en su oído medio fue declarado como discapacitado. Relata que en su época juvenil era una persona muy animada y participativa, realizando trabajos voluntarios en Nueva Imperial, practicaba deportes y asistía a convivencias con las juventudes políticas de ese entonces, siendo una persona que en general disfrutaba de la vida. Sin embargo explica que el señor Lillo Acuña, relata que una vez ocurridos los episodios de tortura todo esto dejó de existir, se empezó a sentir más vulnerable, se volvió más callado dejando de compartir con los demás. Sentía miedo de salir a la calle y sufría constantes pesadillas. Expone que estos cambios de personalidad se mantienen hasta hoy.

Detalla que don Carlos Lillo fue detenido en dos oportunidades, primero el 18 de septiembre de 1973 con la edad de 22 años y posteriormente en 1978 cuando tenía 27 años. En el caso de la primera detención esta se produjo en Temuco, en el sector de Nueva Imperial, lugar donde vivía junto con su hermano pues sus padres habían fallecido a esa fecha. También agrega que a esa fecha ya



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

militaba en las juventudes comunistas. Explica que la detención se produjo el día 18 de septiembre de 1973 a las 8:00 AM, siendo conducido a la segunda comisaria de Santa Rosa en la ciudad de Temuco, lugar en el cual fue severamente torturado con golpes y electricidad en la planta de los pies, genitales y torso. Luego sería trasladado a la cárcel de Temuco, quedando en libertad después de una semana.

Explica que el señor Lillo Acuña, después de lo antes relatado se trasladó nuevamente a Santiago y el 22 de septiembre de 1978 es nuevamente detenido, en esta ocasión en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Gamero con avenida Independencia por funcionarios de la DINA, quienes le indican que habrían obtenido información de una de sus compañeras detenidas. Detalla que fue detenido junto con dos jóvenes más y conducido a la 9° comisaria de Independencia como lugar de paso, para luego ser conducido con los ojos vendados hacía un recinto desconocido en el cual fue severamente torturado. Aquí el abogado hace presente que las circunstancias particulares de la tortura son descritas en el informe psicológico que se acompañará, esto por expresa petición del señor Lillo Acuña. No obstante lo anterior señala que puede relatar que en una de las sesiones de tortura lo bajaron para golpearle los oídos, producto de lo cual hoy sufre una hipoacusia. Continúa relatando que posteriormente su representado fue trasladado hacía un lugar que reconoce como Villa Grimaldi, lo que le llevó a pensar que allí sería ejecutado. Explica que nuevamente los detalles de la detención del señor Lillo en Vila Grimaldi se encuentran en el informe psicológico del PRAIS y que no se dan por reproducidos debido a lo delicado de los mismos. Indica que además este informe da cuenta de los cambios de personalidad, manifestación de los afectos, eventos de despersonalización y un daño físico sufrido como consecuencia directa de los golpes recibidos, además de un Trastorno de Estrés postraumático, como consecuencia del trauma y el estrés sostenido a causa del actuar ilegítimo del Estado de Chile en su persona.

Finalmente en el caso del demandante Manuel Aguilera Jaramillo, hermano de la demandante Carmen Aguilera Jaramillo, relata que la actividad política de este comienza a la edad de 13 años, siendo jefe de propaganda de las juventudes comunistas, cargo en el que estuvo por aproximadamente 4 meses hasta el día del Golpe de Estado, pues desde ese momento comenzó a trabajar para ayudar a la familia, ya que su padre viaja perseguido a Argentina. Luego de ello señala que también se va a Argentina junto con su padre, por un periodo de 6 meses.

Posteriormente indica que el señor Aguilera Jaramillo decidió ingresar al Servicio Militar el año 1978, de lo cual alberga solo recuerdos negativos, pues les



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

obligaban a levantarse a las 3:00 AM para ducharse y luego eran introducidos a casilleros de metal dentro de los cuales le aplicaban corriente a todos los soldados, situación que se prolongó por 8 meses en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Recuerda que posteriormente fue trasladado a Punta Arenas por unos 2 años a causa del conflicto que en esa época existía con Argentina. Durante todo ese tiempo indica haber sido testigo de múltiples vulneraciones de bastante gravedad. Luego regresa a Santiago y ya en 1980 sería detenido junto a un gran número de personas en medio de manifestaciones del día del trabajador, siendo conducidos a la comisaría de San Joaquín en donde fue sometido a golpes de pies y puños, siendo llevado posteriormente a la Policía de Investigaciones y el mismo día relegado a la comisaria de Puchuncavi en la región de Valparaíso, lugar en el cual se mantuvo por aproximadamente 3 meses. Luego en 1981 volvería a ser detenido un día domingo, en medio de una manifestación siendo llevado a la Escuela de Carabineros, estando detenido durante todo ese día para luego ser trasladado a la penitenciaría en donde le mantuvieron por aproximadamente una semana. Agrega que a causa de esta detención lo despidieron de su trabajo como vendedor de una ferretería.

Explica que su representado relató haber mantenido una actividad política en clandestinidad, contraria a la dictadura y que su familia en conjunto recibió la represión por parte del estado. Detalla que su madre servía de ayuda a personas perseguidas y detenidas, su hermana Ana fue exonerada, su otra hermana Juana detenida, torturada y exiliada y Florinda su codemandada también fue detenida y torturada como prisionera política.

En cuanto a los efectos fisiológicos provocados por las detenciones a don Manuel Jaramillo Acuña, relata que se siente constantemente perseguido, no tiene muchos amigos, presenta problemas para dormir y pesadillas constantes, además de tener un carácter explosivo y cambiante. Comenta que no pudo seguir estudiando pero que su convicción política se mantiene intacta, yendo a las manifestaciones y luchando por sus derechos. Con su hermana Juana mantiene una relación más cercana, quien hoy en día tiene el cargo de Presidenta de la "Comisión Ética contra la Tortura", siendo una reconocida activista por los Derechos Humanos a nivel local.

Indica que de acuerdo al informe psicológico elaborado por el PRAIS, los hechos vividos por Manuel Aguilera impactaron drásticamente la vida de este y en su familia, esto pues los hechos comienzan cuando el aún era un niño. En este contexto se vio obligado a adelantar etapas de su ciclo vital, pues tuvo que empezar a trabajar a una edad muy temprana para ayudar a la mantención de su



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

grupo familiar, truncándose sus posibilidades de autorrealización personal, educativa e intelectual en su desarrollo, además de ser vulnerado en sus derechos de infante. Indica el mismo informe que los hechos acaecidos agravan su situación personal, familiar y laboral, siendo cada una totalmente inestable y precaria. Explica que la estigmatización de las personas detenidas en dictadura tiene también consecuencias psicosociales, ya que socialmente se tiende al aislamiento, deteriorándose así sus vínculos colectivos y afectivos. Esta situación genera un desgaste psíquico importante que abarca desde una reacción angustiosa, hasta un cuadro depresivo. Lo anterior a su vez se traduce en incertidumbre para sus seres queridos afectando la convivencia conyugal y familiar. Asimismo este informe detalla que los efectos biopsicosociales asociados a las experiencias traumáticas, es posible identificar la presencia de trastorno del sueño, pesadillas, cambios de humor y depresión del ánimo. También se especifica en el informe que para don Manuel comentar detalles de los eventos represivos resulta muy doloroso.

Manifiesta que como se relató los actores sufrieron de detención, prisión, tortura física y psicológica en distintas fechas, lugares y circunstancias como consecuencia directa e inmediata del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y la posterior persecución, represión y violaciones a los derechos humanos que este generó y que fueron perpetrados por agentes del estado.

En cuanto al derecho, parte por explicar que los principios que forman el Derecho Internacional Humanitario, o los Derechos Humanos, se instalan con mayor fuerza después de la segunda guerra mundial, pero encuentran sus antecedentes incluso en el siglo XVIII, en documentos como la declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica de 1776 o la declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, documentos en los cuales ya se establecen ciertos derechos individuales que el Estado se encuentra obligado a respetar. Continúa detallando que luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han suscitado diversos instrumentos que han permitido conocer la profundidad de la extensión, naturaleza y profundidad de los derechos humanos, los cuales han sido suscritos por Chile. Indica que para que estos acuerdos no terminen siendo palabras al viento y sean cumplidos, es necesario la existencia de un régimen político, económico y social responsable que vele por su cumplimiento y sean la base del debido respeto que se merecen los seres humanos entre sí y con la naturaleza. Explica que en aquel sentido, el sistema de justicia es fundamental pues sienta un precedente al reconocer a estos sujetos históricos como víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

Chile y el deber de reparación que a dicho estado le compete, lo que nuestra Corte Suprema ya establecido en diversos fallos como en el rol de ingreso a corte 1092-2015, conocido como el Caso de Isla Dawson, o el rol 68876-2016 caratulado Hover con Fisco. Hace presente que otros cuerpos legales contienen normas atinentes al caso, como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad y la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Posteriormente pasa a referirse al daño moral, aduciendo que en el caso de los actores, las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos cometidas por el Estado de Chile, dan cuenta de una política de Estado terrorista que produjo un profundo y permanente daño psicológico el cual se categoriza como daño moral, y que marcó en forma negativa la vida de sus representados, pues aquellos siguen padeciendo el terror, el miedo, la angustia y la desesperanza que provoca ser víctima de las atrocidades que ya se describieron. Expresa que es un hecho no discutido en la causa la afectación que estos hechos tuvieron en la salud de los actores y no solo con carácter físico, sino que también psicológicas y psicosomáticas. Continúa exponiendo que bajo el mismo razonamiento el daño moral deriva de la lesión de un derecho, cuando los efectos de esta no solo menoscaban los intereses jurídicamente tutelados por la norma, sino que penetran la intimidad de la víctima y de quienes forman parte de su círculo más próximo, afectando sus sentimientos, emociones, expectativas, afectos, y en general sus valores de afección, cuestión que evidentemente genera un daño al proyecto de vida de cada demandante. Explica que teniendo en cuenta que todo daño debe ser indemnizado, el daño moral sufrido por sus representados debe serlo especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que lo generaron. Indica que esta reparación debe consistir en una indemnización que proporcione las bases para obtener goces equivalentes que compensen de cierta forma las pérdidas, el dolor y el sufrimiento vividos, es decir, procurar dar a la víctima el medio de procurarse satisfacciones equivalentes a aquellas de las que fuera privado, cuestión compleja en el caso de marras por la magnitud del daño.

Finaliza citando un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que se señalan los fundamentos de la reparación y también cita artículos pertinentes de la Constitución Política de La República, así como de la Ley N°18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

En folio 7, comparece Ernestina Ruth Israel López, abogada procuradora fiscal Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien viene en contestar la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasa a exponer.

Refiere a las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que tanto la Ley N° 19.234 como la Ley N° 19.992 han concedido a sus beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país el que se accede concurriendo la persona al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la oficina del PRAIS.

Añade que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también se obtiene el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y la promoción del resto de los derechos humanos.

Arguye que además se les ofrece apoyo técnico y rehabilitación física con la finalidad de superar las lesiones físicas derivadas de la prisión política o tortura, así como también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuación gratuita de los estudios básicos, medios o superiores, siendo el organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho, la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo menciona el caso en que un hijo o nieto de un beneficiario, siempre y cuando este último no hubiera hecho uso de este derecho, puede postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Milla, Nuevo Milenio o las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que los reglamentos tengan para esas becas. Por último se entregaron beneficios en vivienda a través del acceso a subsidios.

Aduce que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas trasgresiones. En este sentido, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.

Hace presente que hasta hoy el Estado ha hecho importantes esfuerzos con el fin de reparar a las víctimas de derechos humanos, cumpliendo con estándares internacionales de Justicia Transicional y entregando indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, las que han compensado a dichas víctimas por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos. Por lo anterior indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente. Cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha fallado bajo ese criterio, el que ha sido reiterado y ratificado en el tiempo.

Expresa que de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecuaria, luego de tomar en consideración los montos ya entregados por el Estado por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Asimismo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha estimado que es beneficioso establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas con la finalidad de no provocar desigualdades.

Menciona el documento denominado Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos en el que se ha expresado los programas de reparación, reconociéndose en el mismo la existencia de la problemática de exigir indemnización vía de programas de reparación y en forma paralela, el ejercer una acción civil judicialmente.

A su vez sostiene que una vez que el gobierno ha hecho esfuerzo de buena fe en crear un sistema administrativo que facilite la entrega de beneficios a las víctimas, y permitir a los mismos iniciar litigios en su contra originaría el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño, además de poner en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que el segundo sistema no es



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

Foja: 1

fácilmente evitable, toda vez que los Tribunales podrían sobrepasar fácilmente los beneficios en relación a los entregados en un programa masivo, lo que podría generar una sensación de desilusión y un cambio de expectativas con los programas administrativos. En este mismo sentido, arguye que precisamente se busca el rechazo de nuevas peticiones de indemnización lo que conlleva a un fortalecimiento de los programas de justicia transicional, ya que de no ser así implicaría un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa referente a ello.

Concluye en que la acción deducida se funda en idénticos hechos pretendiéndose una indemnización por los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias, por lo que opone la excepción de reparación satisfactiva por ya haber sido indemnizados el demandante.

Opone además la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2332 en relación al artículo 2497 del Código Civil, toda vez que de acuerdo a lo relatado por el actor fue detenido entre el 23 y el 27 de diciembre del año 1984, siendo sometido a apremios ilegítimos y tortura en el marco del régimen dictatorial que regía en ese momento. A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta la vuelta de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido en la ley. A consecuencia de lo señalado, opone la excepción de prescripción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2332 del Código de Bello, solicitando acogerla y de este modo se rechace íntegramente la demanda intentada. En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2515 en relación al artículo 2514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explica las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Añade que en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2497 establece las normas de la prescripción en favor y en contra del Estado. Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se



«RIT»

Foja: 1

deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso el demandante tuvo muchos años para ejercer dicha acción. Transcribe el extracto de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema la que ha declarado que las acciones civiles en estos casos se rigen por las normas del derecho común, toda vez que los tratados internacionales establecen la imprescriptibilidad respecto de las acciones penales, y no de las acciones civiles.

Sostiene que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, si no que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando el demandante funda la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad, o bien que prohíban o impidan la aplicación del derecho interno en esa materia. Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguno de ellos se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Manifiesta que en relación al daño e indemnización pedida, es difícil avaluar y apreciar de forma pecuniaria los daños no patrimoniales sufridos, toda vez que su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicio tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño. Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio. Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la cuantificación correspondiente a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado. Señala que en este sentido la cifra solicitada por el actor es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema que han resuelto bajo ese argumento.

Señala que en subsidio de anterior, su parte alega que respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por el demandante de parte del Estado, conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirá percibiendo a título de pensión, cuyo objetivo también es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finaliza haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón, no existiendo sentencia dictada en autos su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede. Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil insta de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

En folio 10, comparece el apoderado de los demandantes evacuando el trámite de réplica, solicitando se rechacen las excepciones, defensas y alegaciones esgrimidas por el Fisco según las argumentaciones expuestas, con costas.

Parte refiriéndose a la excepción de pago señalando que el Consejo de Defensa del Estado, intento hacer suyo una serie de actos del Estado a través de los que se intentó tímidamente rearmar a los afectados por las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por agentes del estado durante la dictadura militar iniciada en nuestro país en 1973. Estas reparaciones han sido reconocidas como parciales por el propio estado. A mayor abundamiento el texto de la última de ellas, la Ley N°20.874, del 29 de octubre de 2015, en su inciso en el artículo 1 indica *“Otorgase un aporte único, en carácter de reparación parcial, ...”* El inciso 3° del mismo artículo indica *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura”. Así el reconocimiento del derecho a pedir una reparación está implícitamente reconocido por el Estado en el texto de la ley citada. Añade que en reiteradas sentencias del último tiempo los tribunales de primera instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han dictado una línea jurisprudencial absolutamente clara y definida en el sentido de reconocer la precariedad de los intentos de reparación del Estado, rechazando las excepciones como las que se han opuesto por el CDE en esta causa.

Respecto a la excepción de prescripción indica que esta no cuenta con sustento por varias consideraciones, partiendo por el hecho de que la materia de este juicio, esto es la reparación del daño causado por un delito de lesa humanidad de carácter imprescriptible. Indica que en todas las causas que se han seguido por hechos similares, se ha establecido desde un principio que se trata de delitos de lesa humanidad protegidos por el Derecho Internacional que tienen el carácter de *ius cogens* o principios consuetudinarios de derecho internacional vinculantes para el Estado de Chile. Así lo establece el art. 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Indica que existe numerosa jurisprudencia tanto del derecho internacional como del derecho nacional que reafirma la tesis de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, citando varias de ellas y especialmente el fallo rol 1092-2015 de la Excelentísima Corte Suprema.

Señala que en este mismo sentido el Estado al dictar leyes de reparación está reconociendo una deuda pendiente con un grupo grande de ciudadanos y en segundo lugar intenta una indemnización parcial de ella. Al hacer estos actos ha suspendido la prescripción alegada, de acuerdo al artículo 2518 del Código Civil, esto, en el eventual caso de que pudiere aplicarse ella. Al ser de tracto sucesivo la reparación, en el caso de la pensión, y por ende el reconocimiento de la deuda, constituiría una suspensión permanente de la prescripción alegada. Los argumentos anteriormente citados están profusamente expuestos en las sentencias que se acompañan, así como en la presentación de la demanda.

En cuanto al daño y las indemnizaciones reclamadas, tratándose del daño moral, indica que este no se borra por la indemnización, la pérdida producida por este permanece cualquiera sea su magnitud y cualquiera sea la magnitud de la cantidad de dinero percibida. Así se debe concluir que ninguna indemnización es capaz de borrar los daños sufridos por los demandantes durante todos estos años, daños que son permanentes. Referente a los montos solicitados, es evidente que lo pedido es lo que esta parte aprecia como justo recibo para compensar los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

daños, esto sin perjuicio de que el Tribunal debe ser quien determine el monto de la indemnización.

En folio 12, comparece la demandada evacuando el trámite de dúplica mediante la cual ratifica todas las argumentaciones expuestas en la contestación, las que da por reproducidas, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Reitera que en lo tocante a la excepción de reparación satisfactiva respecto al daño moral, este ya ha sido indemnizado, por lo que es procedente lo alegado atendido que el Estado de Chile ha empleado un enorme esfuerzo para reparar el daño producido a las víctimas, ya sea a través de transferencias de dineros, reparaciones simbólicas, etc.

Respecto de la prescripción de la acción deducida, insiste en la importancia de la sentencia que unificó la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, la que se transcribo en sus principales argumentos en el escrito de contestación, y la que concluye que las acciones de responsabilidad extracontractual del Estado prescribe en 4 años contados de la ocurrencia de los hechos, según lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal ya citado, agregando que la misma ha estimado que los tratados internacionales de derechos humanos no impiden la aplicación del derecho interno, y en específico a lo expresado sobre la prescripción de la acción civil. Alude a jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha resultado bajo ese argumento.

En folio 20, se recibió la causa a prueba fijándose los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales esta habría de recaer, rindiéndose la que obra en autos.

En folio 51, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio N°1, comparece don Pablo Andrés Solovera Catalán, abogado, domiciliado en Nueva Amunátegui N°1405, oficina 404, comuna de Santiago, en representación judicial de Florinda del Carmen Aguilera Jaramillo, Manuel Aguilera Jaramillo y Carlos Lillo Acuña quien deduce demanda en juicio ordinario de responsabilidad extracontractual con indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, solicitando tenerla por interpuesta, acogiéndola a tramitación y en definitiva que se le condene al demandado al pago de \$50.000.000, a favor de cada uno de los demandantes,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta su pago efectivo y total de estas, o la suma que el Tribunal determine, con costas.

Funda su demanda, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que a folio N° 7, comparece doña Ernestina Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, quien estando dentro de plazo legal contesta la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasó a exponer.

Argumenta su defensa, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran esgrimidos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan íntegramente por reproducidos para todos los efectos legales.

TERCERO: Que a folio N° 10, comparece la parte demandante, evacuando dentro de plazo legal la réplica, mediante la cual reitera íntegramente lo expuesto en la demanda, y agregando además otras argumentaciones.

Fundamenta su réplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran presentados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por absolutamente reproducidos para todos los efectos legales.

CUARTO: Que a folio N° 12, comparece la parte demandada, quien estando dentro de plazo legal, evacúa la dúplica, ratificando todas las argumentaciones efectuadas en la contestación.

Basa su dúplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran enunciados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por totalmente por reproducidos para todos los efectos legales.

QUINTO: Que, en el folio N° 20, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales iba a versar, los siguientes:

1° Si por una actuación del Estado a través de sus agentes se ocasionaron perjuicios a los demandantes de autos. Hechos y circunstancias configurativos de dicha actuación.

2° Naturaleza y monto de los perjuicios causados.

3° Si los demandantes han sido indemnizados en conformidad a la Ley N°19.992 y 20874.

4° Efectividad de encontrarse prescrita la acción intentada en autos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

5° Si la acción ordinaria se encuentra suspendida, y época en que se produjo ésta suspensión.

SEXTO: Que los medios de prueba ofrecidos por los demandantes en autos y rendidos en la oportunidad procesal correspondiente son, a saber, los siguientes:

Instrumental:

En folio 36:

1.- Certificado de discapacidad PRAIS, resolución exenta número 4051, 27 de septiembre de 2017, emitido por COMPIN Subcomisión norte correspondiente al señor Carlos Lillo Acuña.

En este documento se certifica que don Carlos Lillo Acuña, de 66 años, posee una discapacidad auditiva y mental psíquica de un 39,3%, que deriva de un edentado parcial (KO8.1), Hipoacusia bilateral, trastorno de estrés post traumático compensado (F43.1)

2- Declaración simple de recepción de copia de antecedentes contenidos en la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura de don Carlos Lillo Acuña, de fecha 31 de mayo de 2017, emitida ante la Unidad de Colaboración del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En este instrumento consta que Carlos Lillo Acuña, recibió copia de los antecedentes contenidos en la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Valech I) en su calidad de titular de dicha información, al haber sido incluida en la nómina de víctimas de Prisión Política y Tortura elaborada por la Comisión.

3.- Informe de Carlos Lillo Acuña, de fecha 15 de diciembre de 2003, emitido por Comisión Valech.

Aquí se da cuenta de que el señor Lillo Acuña fue detenido en tres oportunidades a pesar de que solo se da testimonio de dos de ellas. Se relata la primera detención que ocurrió en su domicilio en Temuco, siendo conducido a un retén en donde fue sometido a golpes de pies y puños, siendo también torturado. Luego lo llevaron a la 2° Comisaría, donde fue colgado de las muñecas, desnudo y aplicándosele corriente en todo el cuerpo, quedando en muy mal estado, siendo posteriormente arrastrado a una celda llena de otros detenidos. Indica que esta operación se repitió en dos oportunidades durante aquella noche.

Respecto a la segunda detención relató que esta se produjo en Santiago en el mes de septiembre de 1978, por agentes de la CNI quienes lo condujeron al



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

recinto conocido como “Cuartel Borgoño” en donde llegada la noche fue torturado e interrogado sobre sus actividades y las de los sacerdotes de la zona norte de Santiago. Luego fue desnudado y entregado con las muñecas atadas a los tobillos, aplicándosele electricidad y golpes de palmas en los oídos. Relata que estos malos tratos le ocasionaron a la larga un deterioro progresivo en los oídos, con la dificultad que ello trae para la comunicación.

4.- Informe de Florinda Del Carmen Aguilera Jaramillo emitido el Instituto Nacional de Derechos Humanos con fecha 16 de mayo de 2017.

En este documento consta el relato de la actora, quien señala que la primera detención sufrida fue en julio de 1973, por parte de un Carabinero, saliendo de su liceo justo después de haber participado en un panfleteo de una actividad en favor de presos políticos. Indica que fue conducida a una comisaría del paradero 8 de la Gran Avenida y el día siguiente al COF. Al día subsiguiente señala que la pusieron a disposición del juzgado del Crimen. Señala haber quedado en libertad condicional después declarar. En su segunda detención indica que fue detenida el 8 de marzo de 1983 en la Plaza Chacabuco en medio de una manifestación, fue golpeada en reiteradas ocasiones y fue liberada después de aproximadamente 9 horas.

5.- Informe de antecedentes de don Manuel Jesús Aguilera Jaramillo emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos con fecha 16 de mayo de 2017.

Este actor aquí da cuenta de que fue detenido y conducido a una comisaria en San Joaquín en donde fue golpeado estando en el suelo, le tomaron sus huellas digitales y fotos. Lo trasladaron a Puchuncavi, en donde era vigilado en las calles. Indica que su detención se prolongó desde el 1 de mayo de 1980 al 5 de agosto de ese mismo año. Añade que tuvo otra detención de aproximadamente una semana pero no recuerda la fecha en que ocurrió.

En folio 40:

6.- Informe psicológico de don Carlos Lillo Acuña, emitido en octubre de 2018 por las profesionales Carmen Obreque Morales, asistente social y coordinadora PRAIS, y Paula Hinojosa Oliveros, psicóloga clínica PRAIS SSMN.

En este informe primero se realiza un contexto familiar actual de don Carlos Lillo y asimismo se hace un detalle de sus antecedentes familiares, de salud y educacionales al momento de su primera detención.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

Posteriormente se hace un resumen del relato del señor Lillo Acuña, en donde se detalla que primeramente fue detenido el año 1973 en Temuco, oportunidad en la cual fue detenido en su hogar y conducido a la 2° Comisaria de Santa Rosa de Temuco, lugar en el cual fue interrogado, severamente torturado con golpes y electricidad en la planta de los pies, genitales y torso. Luego sería trasladado a la cárcel pública de Temuco, siendo liberado aproximadamente dos semanas después. La segunda detención se produjo en Santiago el 22 de septiembre de 1978, en calle Muñoz Gamero con Independencia, por parte de funcionarios de la DINA, quienes le indican que habían obtenido información respecto de el por parte de una compañera detenida. En esta ocasión fue conducido a la 9° Comisaria y luego conducido vendado a un recinto desconocido donde es torturado nuevamente con electricidad en sus genitales. También fue golpeado con paños mojados y lo golpearon en los oídos, lo que le produjo una hipoacusia. Luego señala que reconoce el lugar en donde ocurrieron estos hechos como Borgoño, 5° zona de salud. Luego relata que lo sacan de aquel lugar y lo conducen a un lugar que identifica como Villa Grimaldi, allí pensó que lo matarían, sin embargo fue mantenido en una caseta de madera para ser subido en otro automóvil y ser arrojado a la calle cerca de su domicilio.

La profesional que elabora el informe, explica que el señor Lillo da cuenta de un grave daño posterior a eventos de tortura, transformándose en una persona distinta de lo que recuerdo previo a los actos de violación a los derechos humanos. Indica que tuvo cambios en la personalidad, manifestación de los afectos, eventos de despersonalización y un daño físico como consecuencia de los golpes recibidos. Además de un trastorno de estrés postraumático que se mantiene.

7.- Informe psicológico de evaluación de daño asociado a violencia política de don Manuel Jesús Aguilera Jaramillo, emitido con fecha 16 de marzo de 2018 por el profesional Cristian Vilches Guerra, psicólogo de PRAIS del SSMSur.

En este informe primero se hace un resumen de los antecedentes relevantes previos a las detenciones experimentadas por don Manuel Aguilera. Luego se resume el relato del señor Aguilera en donde se detalla que esta ocurrió en el año 1980 mientras participaba de una marcha del sindicato IRT y los detuvieron en forma masiva a más o menos 30 personas entre ellas el, los llevaron a la Comisaria de San Joaquín lugar donde estuvo desde las 12 del día hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Allí relata haber sido sometido a golpes, patadas, también le tomaron fotografías. Luego fue llevado a la Policía de Investigaciones y de ahí relegado a la Comisaria de Puchuncavi, donde



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

permaneció en tal calidad por 3 meses, periodo en el cual tenía que firmar en la comisaria a las 8 pm. Agrega que durante todo ese tiempo fue vigilado a diario. Su segunda detención se produjo en 1981 también en una manifestación, el motivo fue una agresión a Carabineros. Allí fue llevado a la Escuela de Carabineros en donde lo bajaron a un sótano en donde estuvo detenido todo el día. Le propinaron golpes y patadas mientras lo mantenían tendido en el suelo. Luego sería llevado a la penitenciaría donde estuvo una semana. El profesional a cargo del informe concluye que el señor Aguilera Jaramillo experimentó daños por la interrupción y alteración de su vida social a causa de las diversas experiencias traumáticas represivas que experimentó, lo que conforma finalmente una politraumatización que repercutió y repercute en sus dinámicas interpersonales afectando su salud y estabilidad emocional durante un extenso periodo de tiempo.

8.- Informe psicológico de evaluación de daño asociado a violencia política de doña Florinda Del Carmen Aguilera Jaramillo, emitido con fecha 09 de noviembre de 2018 por la profesional Miguel Ángel Varas Mendoza, psicólogo clínico de PRAIS SSMSur.

Aquí se da cuenta de los antecedentes relevantes relacionados al hecho mismo de las detenciones sufridas por la actora. Luego se relatan las mismas indicándose que la primera de ellas se produjo en la comuna de San Miguel cuando la actora salía de su liceo. Indica que el motivo de la detención fue por que andaba entregando panfletos. Explica que le pegaron una patada, la hicieron desnudarse en su parte superior y sacarse los zapatos, también relata que le pegaron cachetadas. Agrega que en esta oportunidad un carabinero le dijo “¿Quién te enseñó a sacarte el sostén así?” y le lengüeteó la cara, lo que le produjo mucho asco. Luego la segunda detención se produjo en la década de los 80 cuando tenía aproximadamente 30 años de edad, y que en esta oportunidad lo paso mal. Explica que el hecho se produjo en un recinto en La Pincoya y que luego de la detención estuvieron 3 días a patadas, combos, escupos y agarrones. Añade que luego las mujeres detenidas fueron trasladadas a un Centro de Orientación Femenina, en donde recibió golpizas por parte de gendarmes mujeres quienes la “agarraban de las mechas” y la arrastraban. Indica que estuvo en ese lugar 5 días y que no comió nada en ese periodo por que dudaba de las condiciones de higiene y de la calidad de los alimentos. Agrega que una vez liberada el documento que se le entregó decía relación con causas relacionadas a la prostitución, lo que le trajo problemas con su madre.

El profesional que elabora este informe señala que la actora tiene un daño emocional y psicológico permanente relacionado a la violencia de género,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

psicológica, física y sexual ejercido en su contra por parte de agentes del estado durante la dictadura militar.

Testimonial:

En folio 50:

1.- Comparece Cristian Vilches Guerra, quien previamente juramentado declaró ante el receptor judicial Carlos Guillermo del Campo Briceño, en el siguiente tenor: Respecto del punto de prueba uno declara que respecto de la evaluación que practico a Manuel Aguilera, se desprende que este fue detenido en dos ocasiones por agentes del estado durante la dictadura cívico-militar en Chile entre 1973 y 1990, ocurriendo la primera de estas detenciones en 1980 por parte de Carabineros, siendo traslado a la comisaría de San Joaquín, en donde recibió patadas, golpes varios e insultos, siendo traslado luego a un cuartel de la PDI para finalmente ser relegado a la localidad de Puchuncavi durante tres meses. En este periodo fue constantemente vigilado por agentes del estado y además se enteró de que su hermana Juana Aguilera había sido detenida, torturada salvajemente y obligada a salir al exilio. Detalla que la segunda detención ocurrió el año 1981, siendo llevado el señor Aguilera a la Escuela de Carabineros, en donde también recibió insultos, patadas y golpes para luego ser trasladado por un periodo de aproximadamente una semana. Señala que producto de esta detención el perdió su trabajo. Detalla que en ambas detenciones don Manuel sufrió torturas físicas y psicológicas, generando en el efectos dañinos en su salud de manera integral. Asimismo vio dañada su estabilidad laboral, su situación familiar, se volvió inestable y sobre todo su salud psicológica y emocional se vio gravemente dañada. Entre los síntomas que se presentan en el señor Aguilera Jaramillo se encuentran problemas para conciliar el sueño, pesadillas constantes, inestabilidad anímica, cambios de humor, sentimiento de desconfianza, aislamiento social. Repreguntado sobre la forma en que obtuvo la información que ha declarado, explica que se basa en una entrevista que tuvo con el testigo en base al protocolo de Estambul, en donde el entrevistado relató los hechos antes mencionados y que esto se da en el marco del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS).

Respecto del punto de prueba 2, indica que el relato y las secuelas asociados a los eventos represivos que le tocó vivenciar son coincidentes con vulneraciones graves a los derechos humanos generando un quiebre relevante en su proyecto de vida, siendo este perjuicio de carácter irreparable y por lo mismo es imposible de avaluar, no obstante si indica que lo ocasionado al señor Aguilera



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

Jaramillo ha dejado una huella en su vida, que nunca va a poder ser borrada ni reparada

2.- Comparece Miguel Ángel Varas Mendoza, quien previamente juramentado declaró ante el receptor judicial Carlos Guillermo del Campo Briceño, en el siguiente tenor: En cuanto al punto de prueba 1, afirma que existen distintos momentos de vulneración respecto de la demandante Florinda Aguilera. En un primer momento están las vulneraciones generadas por Carabineros, en otro momento por Gendarmería y en tercer lugar con la detención de su hermana Juana, quien también sufrió vulneraciones por parte del Estado. Detalla que la señora Aguilera Jaramillo fue víctima de violencia física, psicológica, sexual y específicamente de género. Asimismo fue testigo de torturas a otros detenidos. Explica que la tortura perpetrada por los agentes del Estado afectó la salud mental de Florinda hasta la actualidad, es decir tenía una traumatización extrema por violencia política.

Al punto de prueba 2, señala que en relación a la naturaleza del daño experimentado por la señora Aguilera, el mismo está asociado a las vulneraciones generadas por agentes del estado durante el periodo de la dictadura militar. Explica que es muy difícil reparar o resolver la traumatización extrema experimentada por la víctima, lo que le consta por ser profesional de la salud mental que entrevistó a doña Florinda.

3.- Comparece Paula Hinojosa Oliveros, quien previamente juramentada declaró ante el receptor judicial Carlos Guillermo del Campo Briceño, en el siguiente tenor: Pronunciándose sobre el punto de prueba 1 indica que ella evaluó e hizo psicoterapia al actor don Carlos Lillo, oportunidad en la cual cayó en cuenta de que este había sido una víctima de violaciones a los derechos humanos, a sus 22 años y luego a sus 27 años, todo lo que le consta por el propio relato del señor Lillo, quien le describió distintos tipos de torturas a las cuales fue sometido primero en Temuco a sus 22 años y luego en Santiago cuando tenía 27. Indica que en esta segunda ocasión le pusieron corriente en la planta de los pies y genitales. Estas torturas lo dejaron tan mal físicamente que tuvo que ser revisado por un médico que autorizó que lo siguieran torturando. La tortura continuó siendo golpeado con paños húmedos y siendo golpeado en sus oídos de manera brutal lo que le ocasionó una hipoacusia severa y hasta el día de hoy aquello dañó su desempeño y su interacción social. El señor Lillo continuó su relato indicando que fue llevado a Villa Grimaldi, en donde se preparó para morir atendido los antecedentes que conocía del lugar. Indica que como profesional le consta que el resultado de esta experiencia traumática y la violación a sus derechos humanos, de todas las formas



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

más aberrantes en que en ser humano puede ser torturado, su vida marca un antes y un después. Luego de la tortura él tuvo cambios en su personalidad, retraimiento social, disminución en la manifestación de sus afectos, sensación de despersonalización, mareos, dolor en su cuerpo producto de los golpes y hasta el día de hoy experimenta pesadillas, angustia, temor, lo que se traduce en un trastorno de stress postraumático..

SÉPTIMO: Que, por su parte la demandada produjo la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario:

En folio 22:

1.- Ordinario N°59403/2019, Informe Beneficios de reparación victima Valech que Indica. Causa Rol N°14441-2019. Caratulada: "Lillo con C.D.E.", emitida el 12 de junio de 2018 por el Instituto de Previsión Social. Este documento da cuenta de los dineros percibidos por los actores por concepto de reparación establecidas por las leyes N°19.992 y 20.874.

I-EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE REPARACIÓN INTEGRAL:

OCTAVO: En primer término, corresponde resolver la alegación opuesta por la demandada, y que dice relación con la reparación integral de los actores destinadas a enervar la acción indemnizatoria por daño moral pretendida, fundada en los beneficios de los que han recibido los demandantes conforme a las leyes 19.123, 19.992 y 20.874.

Ha acompañado como antecedente el documento refrendado en el considerando precedente, en el que consta que los demandantes han recibido las prestaciones que se indican.

NOVENO: Que, en el contexto político vivido a nivel nacional entre los años 1973 y 1990, el artículo 1 de la Ley N°19.123 dispone la creación de la *"Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago"*.

Su objeto será la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, y las demás funciones señaladas en la presente ley".



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

En ese sentido, una de las finalidades de la aludida Corporación, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la citada ley consiste en “*Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley*”, recayendo en las personas consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En refuerzo de esta normativa, el artículo 1 de la Ley N°19.992, concede una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

En el mismo orden de cosas, la Ley N°20.874 concede a dichas personas un beneficio económico único, tal como dispone su artículo 1°.

DÉCIMO: Respecto de la defensa en estudio, no desconoce este sentenciador los esfuerzos y la implementación de políticas de Estado vigentes hasta hoy en miras a perseguir la reparación del daño causado por agentes de Estado en el contexto del régimen vigente entre 1973 y 1990, recogidos a través de los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura, que refrendan e incorporan a las víctimas de violaciones a los llamados Derechos Humanos, cuya dimensión político-social, precisamente, apuntaba a la reparación y fortalecimiento de las instituciones democráticas y la consolidación de la responsabilidad del Estado frente a estas acciones, lo que también se ha traducido en las diversas persecuciones penales aún vigentes hasta el día de hoy.

En este escenario, es claro que la Ley N°19.123 y las que se han dictado posteriormente han concedido una serie de beneficios, entre ellos los directamente pecuniarios, tanto en materia de salud como otros de carácter simbólico, los que se enmarcan dentro de las finalidades de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, según su artículo 2 antes aludido, destinadas a “promover la reparación moral “de las víctimas.

Sin embargo, el hecho que estas prestaciones se hayan fijado por ley en beneficio de las aludidas víctimas gira en torno al concepto de reparación en todas sus dimensiones y, precisamente, dentro de la finalidad que se anota en el párrafo precedente, esto es, la reparación moral, hecho que no supone impedir el ejercicio de acciones civiles contra el Estado por parte del actor.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

No consta que las prestaciones otorgadas supongan una renuncia a la acción civil indemnizatoria que por este acto se ejercen, lo que permite colegir, en principio, que la excepción reclamada por la demandada es improcedente.

A mayor abundamiento, las diversas prestaciones reconocidas a nivel legal no apuntan necesariamente a resarcir la dimensión moral del sujeto, sino también el ámbito estrictamente patrimonial y recuperar la pérdida de chances causadas por los actos de agentes estatales (lucro cesante), los que también se ven dirigidos a sus parientes, tales como los referidos al ámbito educacional y en materia de salud.

UNDECIMO: En definitiva, este sentenciador rechazará la excepción en estudio conforme al razonamiento precedente.

II-EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:

DUODÉCIMO: De manera subsidiaria a la excepción antes descrita, la parte demandada opuso la de prescripción extintiva de la acción civil, sea en los términos dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, o bien conforme al artículo 2515 del mismo cuerpo legal, en consideración a la data de los hechos que sirven de sustento de la acción en relación con la interposición y posterior notificación de la demanda.

DÉCIMOTERCERO: En relación con esta materia, la institución de la prescripción, en los términos del artículo 2492 del Código Civil, que precisamente se encuentra destinada a la consolidación de la “seguridad de las posesiones y del crédito”, tal como indica el mensaje de dicho cuerpo normativo.

En relación con esta premisa, el artículo 2493 del mismo cuerpo legal es claro en señalar que *“El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”* y que el artículo 2497 establece que *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Respecto a esta materia, conforme a la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, el artículo 2332 del Código Civil establece que *“Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”*.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

DECIMOCUARTO: Es un hecho de la causa –y que al menos no aparece controvertido por la demandada-, que los demandantes sufrieron detenciones por parte de agentes del Estado en diversas fechas entre 1973 y 1981, siendo liberados tiempo después, en el contexto político vigente en la época.

Al respecto, es necesario destacar el concepto de delito de lesa humanidad que se encuentra regulado en la Ley N°20.357, que en su artículo 1° indica que *“Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias:*

2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.

El mismo articulado, luego de referirse a los delitos de lesa humanidad, al genocidio y crímenes de guerra, dispone en el artículo 40 que *“La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”.*

En relación con lo expuesto, de los antecedentes acompañados en el folio 36 y 40, se describe y se desprende que los delitos cometidos entre 1973 y 1981 respecto de los demandantes obedecieron a razones de índole política y que se encuentran vinculados a actos del Estado, en la forma que en dichos documentos se consignan latamente.

DECIMOQUINTO: En este análisis, y por aplicación del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, se desprende que rige, dentro de ese estándar normativo, lo dispuesto en artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que ha sido ratificado por el Estado Chileno y se encuentra actualmente vigente, que dispone al efecto que *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”*

Sobre el particular, y en diversas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido enfática en establecer, por una parte, que *“que toda violación a una obligación internacional que haya producido*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo”, mientras que “la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia “Velásquez Rodríguez vs Honduras”, dictada con fecha 21 de julio de 1989, párrafos 25 y 26. Consultado en <https://summa.cejil.org/es/entity/i0qbrq3n93utmx6r?page=9>; fecha de consulta 28.04.2022)

DECIMOSEXTO: Todo este razonamiento que se viene sosteniendo hasta acá permite llevar a la conclusión que, en primer término, en materia de Derecho Internacional, y reconocido a nivel interno, los llamados delitos de lesa humanidad gozan de la imprescriptibilidad de la acción penal.

En segundo lugar, sobre la base de la vulneración de los derechos que esas acciones lesivas han causado sobre sectores de la población, los estatutos internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, conceden un derecho a reparación integral, lo que no sólo permite el derecho al recurso y a la acción judicial, sino al resarcimiento de todo perjuicio patrimonial ocasionado y del que se requiera efectiva reparación.

En este aspecto, lo refrendado en el considerando anterior deja en evidencia que, frente a las dificultades en la persecución de estos hechos y la satisfacción del derecho a la “reparación integral”, resulta contraproducente entonces aplicar un estatuto de prescripción extintiva a hechos de esta naturaleza, por cuanto se oponen al ordenamiento internacional frente a esta prerrogativa de reparación integral, que resulta predominante por sobre la consolidación de las relaciones jurídicas en base al mero transcurso del tiempo. De lo contrario, se vulneraría precisamente aquel derecho antes citado, por lo que debe necesariamente la acción civil derivada de estos hechos compartir la misma imprescriptibilidad que la acción penal.

No es obstáculo, a juicio de este sentenciador, que los tratados y la normativa internacional aplicadas en esta litis sean posteriores en cuanto a su vigencia al ordenamiento interno, pues los primeros predominan en su aplicación al referirse a derechos inherentes a la naturaleza humana y, por ende, reconocidos dentro del contexto internacional, dado su interés público, los que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

tiene como base principios de índole superior y que buscan la protección de los derechos más esenciales de cada ser humano.

Además, las normas de prescripción rigen esencialmente para relaciones entre privados y, en el caso de aplicarse en los términos del artículo 2497 del Código Civil, dicen relación con toda cuestión contractual y patrimonial en las que predomina el interés privado en las relaciones con el Estado y sus órganos.

Disponer su aplicación por sobre los tratados internacionales, además, colisiona con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al prescribir precisamente que *“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”*.

Este es un tema que, por cierto, ha sido reconocido ya por la Excmá. Corte Suprema en diversas sentencias dictadas por la materia (Rol N°8318-2018; Rol N°29944-2019; Rol N°29.617-2019; Rol N°79.259-2020, entre otras).

DECIMOSÉPTIMO: Por tanto, en relación con la alegación formulada por la demandada en análisis, tanto en su fundamento principal como subsidiario, deberá ser rechazada al estimar que la acción indemnizatoria en este tipo de materias es imprescriptible atendidos los fundamentos esgrimidos precedentemente.

III-EN CUANTO AL FONDO:

DÉCIMOCTAVO: Que la acción deducida por los demandantes en el folio 1 de estos antecedentes buscan resarcir el perjuicio moral que le han causado los agentes del Estado, reconocidos en el Informe respectivo, habiendo sido sujetos aquéllos a detenciones por parte de agentes del Estado entre 1973 y 1981.

De estos hechos, reclaman el resarcimiento de las consecuencias que de ello derivaron en su esfera personal.

DÉCIMONOVENO: Que es un hecho de la causa que la parte demandada no ha controvertido la ocurrencia de los hechos denunciados, ni su connotación ni el contexto en que se promovieron aquellos, máxime si han sido considerados los hechos en que se sustenta la acción como parte de los cometidos por agentes del estado en contexto de la violación a los Derechos Humanos, de acuerdo a los informes acompañados a los autos en el folio 40, los que no fueron objetados de contrario, así como de la declaración de los testigos que rola a folio 50, testigos que fueron los propios profesionales que elaboraron estos informes y que se condicen completamente con aquellos.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

Sin embargo, la demandada hace presente que el daño moral pretendido a base de esos hechos no se cuantifica a partir de un aspecto económico en particular, por lo que entiende que lo solicitado es excesivo, teniendo en consideración todas las acciones que el Estado ha llevado a cabo a fin de obtener la aludida indemnización y, en subsidio de esa alegación, la regulación debe considerar los pagos ya recibidos y efectuados por el Estado, en armonía con los montos establecidos por los tribunales, los que han recibido los actores durante años y que seguirán percibiendo con posterioridad.

VIGÉSIMO: En esta materia, junto con reiterar las normas citadas con anterioridad respecto al derecho de reparación integral que contempla el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2314 del Código Civil señala que *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”*, a lo que el artículo 2329 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero, dispone que *“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”*.

Se ha reconocido que, dentro de la clasificación del daño, atendida su naturaleza, se encuentra el llamado daño moral, que contempla la aflicción, el daño en los sentimientos e integridad espiritual de una persona, que no forman parte del aspecto patrimonial propiamente tal, y que de alguna forma se busca resarcir mediante la indemnización de perjuicios requerida.

Como perjuicio que es, debe ser probado precisamente por quien lo alega, conforme al artículo 1698 del Código Civil.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en este aspecto, se desprende de los antecedentes ya refrendados lo siguiente:

- a) Respecto de la actora Florinda del Carmen Aguilera Jaramillo, consta que fue detenida en dos ocasiones, la primera de ellas por haber estado arrojando folletos en la vía pública, oportunidad en la cual sufrió maltratos de carácter psicosexual y físico. Su segunda detención se produjo en la población “La Pincoya”, para luego ser reconducida a un recinto ubicado en Vicuña Mackenna en donde permaneció durante aproximadamente cinco días, oportunidad en la cual recibió golpizas.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

Su informe psicológico revela daño psicológico permanente y sintomatológica asociada a la rabia, desagrado, incomodidad y desconfianza hacía las instituciones de seguridad del Estado.

- b) Respecto del demandante don Carlos Lillo Acuña, se desprende de los antecedentes que fue detenido en dos oportunidades, la primera el 18 de septiembre de 1973 a la edad de 22 años, hecho ocurrido en la Temuco. En aquella ocasión fue llevado a una Comisaria, donde fue torturado físicamente, manteniéndose en detención durante un periodo de aproximadamente dos semanas.

Posteriormente en 1978 cuando tenía 27 años fue nuevamente detenido, esta vez en Santiago, por miembros de la DINA quienes lo torturaron produciéndole lesiones físicas de diverso tipo.

El informe psicológico revela cambios en la personalidad, eventos de despersonalización, manifestación de los afectos y un daño físico permanente a causa de los golpes recibidos que se manifiesta en la hipoacusia permanente que presenta y que lo hace calificar como una persona con discapacidad (de carácter auditivo). Asimismo tiene un trastorno de estrés postraumático.

- c) Finalmente en lo que respecta al demandante Manuel Jesús Aguilera Jaramillo, quien también sufrió dos detenciones, la primera en 1980, en la cual golpeado severamente y luego conducido y relegado a la comisaria de Puchuncavi donde estuvo detenido por 3 meses. Su segunda detención se produjo en 1981 en medio de una manifestación en donde nuevamente sería golpeado severamente y lo mantendrían detenido por aproximadamente una semana en la penitenciaría.

El informe psicológico da cuenta que el señor Aguilera Jaramillo sufrió daño por la interrupción y alteración de la vida social pues se vio imposibilitado de continuar con sus estudios, debiendo adelantar etapas de su ciclo vital. También las experiencias traumáticas represivas experimentadas por él y su núcleo familiar conforman una politraumatización que repercute en sus dinámicas interpersonales viéndose afectada su salud y estabilidad emocional durante un extenso periodo de tiempo. Se agrega que la detención política y tortura que sufrió el señor Aguilera Jaramillo truncaron su proyecto vital produciendo un quiebre en el mismo.



«RIT»

Foja: 1

VIGESIMO SEGUNDO: Así las cosas, este sentenciador estima, de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, que los demandantes han acreditado que las detenciones, torturas y relegaciones sufridas por éstos les ocasionaron perjuicio moral pues afectó su dimensión espiritual y física en la forma descrita anteriormente.

Si bien es dable presumir que una consecuencia lógica de una experiencia traumática como la que los demandantes explican en su demanda consiste precisamente en un daño moral de tal entidad que provocó de manera indiscutible un cambio en el desarrollo personal y que permanece en su espiritualidad hasta el día de hoy, como todo perjuicio se requiere prueba para sostener, con precisión, la forma en que ese daño moral no solamente existe, sino que también cómo se ha manifestado o repercutido en los afectados, esto es, su intensidad, de tal manera que ello influirá en el quantum indemnizatorio a fijar.

En este acápite del razonamiento sobre el daño causado, es importante precisar que los antecedentes acompañados con las presentaciones folios 36 y 40, así como la prueba testimonial rendida en folio 50, constituyen prueba idónea para pronunciarse sobre la existencia del daño y el quantum indemnizatorio por el que se debería acoger la acción deducida, los que refieren a los efectos particulares de cada uno de los demandantes

Dichos antecedentes señalados precedentemente y latamente analizados en el considerando sexto de esta sentencia, permiten dar un parámetro a este sentenciador dentro del cual determinar el monto indemnizatorio a conceder a la parte demandante, que de suyo es complejo al valorizar y poder reflejar la intensidad del padecimiento sufrido por ésta frente a los hechos ilícitos ocurridos en el contexto de actuaciones de agentes estatales ocurrido en los periodos ya señalados.

VIGÉSIMO TERCERO: De acuerdo al razonamiento anterior, este sentenciador estima, dada la magnitud de los hechos sufridos por éstos y las secuelas adquiridas a consecuencia de dichas detenciones, el perjuicio moral causado se fijará prudencialmente en las sumas que se indican a continuación, donde influirá tanto la edad en la que sufrieron estos hechos como el tiempo y las veces en que se encontraron privados de libertad, además de la forma como se generó una ruptura en el estilo de vida; los padecimientos sufridos en su detención y las secuelas que han sido permanentes en su estilo de vida.

De este modo, se colige que:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

a) En relación con el perjuicio moral ocasionado a Florinda del Carmen Aguilera Jaramillo, se estima que debe ser resarcida con la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos);

b) Respecto del daño ocasionado a Carlos Lillo Acuña, se estima la suma de \$45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos);

c) En lo que se refiere a Manuel Jesús Aguilera Jaramillo, la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos)

VIGÉSIMO CUARTO: Respecto a la alegación de la demandada a fin de considerar los beneficios que la actora actualmente recibe y que fueron acreditados en autos para los efectos de fijar la indemnización que se concede, se rechazará por los mismos motivos consignados al desechar la excepción de reparación integral, en circunstancias que su argumento plantea, en cierto modo, el mismo efecto que se tuvo en consideración al esgrimir que la parte demandante habría sido resarcida de los perjuicios sufridos con las prestaciones legales concedidas en su favor y que actualmente percibe.

VIGÉSIMO QUINTO: En cuanto al reajuste e interés solicitado, será acogido sólo en cuanto se concederá el aludido reajuste de la suma fijada a título de indemnización conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a aquel en que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el mes anterior al del pago efectivo y, a su vez, generará intereses corrientes, todo ello contado desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo.

VIGÉSIMO SEXTO: En cuanto a la condena en costas solicitada, no se accederá a la imposición de dicha carga procesal en circunstancias que la demandada no fue totalmente vencida y que, en todo caso, estima que ha litigado con fundamento plausible en el proceso.

VIGESIMO SÉPTIMO: Finalmente, el resto de la prueba acompañada al proceso por la demandante que no fuere analizados mayormente en el considerando sexto de este fallo, no gozan del mérito suficiente como para alterar lo resuelto precedentemente, al tratarse de antecedentes que no proporcionan otros hechos a considerar al momento de resolver.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2329, 2332 y 2514, todos ellos del Código Civil, 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 27 de la Convención de Ginebra



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

sobre Derecho de Los Tratados y 170 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I-. Se rechaza la excepción de reparación integral alegada por la demandada.

II-. Se rechaza la excepción de prescripción extintiva conforme a los fundamentos contenidos en los considerandos duodécimo a decimoséptimo de esta sentencia.

III-. Se acoge la demanda interpuesta en el folio 1 de estos antecedentes, sólo en cuanto condena a la parte demandada al pago de las siguientes sumas a título de daño moral respecto de los demandantes:

a) En relación con Florinda del Carmen Aguilera Jaramillo, la suma de **\$30.000.000.- (treinta millones de pesos);**

b) Respecto a Carlos Lillo Acuña, la suma de **\$45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos);**

c) En lo que se refiere a Manuel Jesús Aguilera Jaramillo, la suma de **\$30.000.000.- (treinta millones de pesos).**

Dichas sumas deberán pagarse debidamente reajustadas y con los intereses respectivos de acuerdo a lo señalado en el considerando vigésimo quinto de esta sentencia.

V-Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida y por haber litigado con motivo plausible.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por don Gastón Villagra Santander, juez titular del Décimo Juzgado Civil de Santiago.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG

«RIT»

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, seis de Julio de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NHEMXGNYYPG